

Las posibilidades regionales de la paz

La dimensión territorial resulta fundamental para tratar de hallar posibilidades reales para construir acuerdos en el tema de la participación política. Hacer del posconflicto un escenario estable es un asunto no sólo de democracia sino de gobernabilidad.

Por Víctor Barrera*

Contrario a la discusión del primer punto de la agenda en La Habana, el debate alrededor del tema de participación política ha mostrado con claridad la existencia de dos posturas contrapuestas, para algunos irreconciliables. Las partes divergen no sólo en cuanto a las políticas que consideran necesarias para generar un escenario en el que le sea rentable a la guerrilla dar el salto a la política legal y sin armas, sino también –y sobre todo– en los presupuestos y diagnósticos que las respaldan. Mientras para el gobierno es claro que se trata de un tema de *garantías* enmarcadas en un proceso de *transición* que corresponde a un contexto democrático que es legítimo a pesar de sus fallas, para las FARC es un asunto de *poder popular* y *depuración política* donde el carácter democrático del régimen colombiano no es más que una fachada. A pesar de esto, el excesivo énfasis que se ha puesto en estas diferencias no

permite ver los puntos de encuentro y las posibilidades reales que existen para construir acuerdos en esta materia. En este sentido, la dimensión territorial resulta fundamental.

La estrategia territorial

Tanto las FARC como el gobierno son conscientes que cualquier esfuerzo por pensar en un eventual escenario de posconflicto requiere de la participación activa de las regiones en el proceso y de una apertura política que se iniciaría, en principio, desde la arena local. En el caso del gobierno, Sergio Jaramillo ha sido enfático en señalar la necesidad de implementar un verdadero proceso de “paz territorial” que, en sus palabras, “es la visión y la obsesión del presidente Santos” (Jaramillo, *El Tiempo*, 2013). Por su parte, en una de sus diez propuestas mínimas, las FARC contemplan la posibilidad de instaurar un Consejo de la Participación Territorial y demandan una mayor profundización del proceso descentralizador.

Se percibe, entonces, que la importancia de la dimensión territorial ha pasado de ser un cliché a ser una pieza fundamental al momento de pensar las estrategias de negociación de ambas partes. Y no es para menos.

El “encanto” de las pequeñas cosas

Sin caer en localismos simplones, pensar la paz a esta escala representa enormes ventajas siempre y cuando se conciba bajo un plan nacional que le dé sentido y la oriente. Primero, es bien sabido que no existe un conflicto armado en el país, sino muchos como resultado de las complejas formas en que ha interactuado con los intereses particulares y se ha articulado con problemas locales muy concretos. Segundo, las agendas locales de paz muchas veces resultan ser más sensatas y acotadas, por lo tanto un poco más manejables. Tercero, ha sido a esta escala que se han acumulado una cantidad significativa de experiencias de construcción de paz “desde abajo” que, sin duda, representan un activo que habría que poner a jugar en el posconflicto. Y cuarto, el escenario local sería propicio para asegurar la consecución de resultados concretos y beneficios tangibles derivados de la acción política de ex combatientes lo cual alimentaría la confianza en la legalidad y haría que la opción de retomar las armas fuera demasiado costosa.

A pesar de estas ventajas, el espacio regional y local en Colombia es, cuando menos, un camino lleno de desafíos



y retos por superar. No sólo por la posibilidad de una oposición velada a los diálogos a este nivel sino también porque la mayoría de las regiones que han sido fuertemente afectadas por el conflicto presentan un rezago institucional impresionante. ¿Cómo se perciben ambos retos de cara a la coyuntura actual?

Un clima político favorable

Para nadie es un secreto que cualquier esfuerzo por implementar los acuerdos a los que eventualmente se lleguen en La Habana deberá contar con el visto bueno de un conjunto amplio de una clase política local no muy bien ponderada frente a la opinión pública por los escándalos de corrupción que ha protagonizado y las relaciones simbióticas que ha establecido con sectores de la ilegalidad. Sin embargo, se hace mal en asumirlos como “enemigos absolutos” del proceso. Se trata, más bien, de una pieza adicional del ajedrez político que el Gobierno debe jugar. Gústenos o no, la paz en Colombia se construirá no sólo junto a las FARC, sino también de la mano de los “Almarios”, “Merlanos” y “López Cabrales” del país, toda una “fauna política” que, sin llamar a esencialismos, ha mostrado una capacidad de adaptación y de reinención lo suficientemente efectiva como para reproducir su poder en el escenario local y proyectarse con éxito al ámbito nacional. Ahora bien, ¿hay esperanzas?

Uno pensaría que tal vez sí. Aunque deben tomarse con beneficio de inventario, las reiteradas declaraciones de los mandatarios departamentales y municipales a propósito de su apoyo al proceso de paz y su compromiso con un eventual posconflicto parecen ser esta vez genuinas no tanto porque exista un resorte moral que los impulse –aunque sin duda existen casos donde ésta sea la razón principal– sino más bien porque en la coyuntura actual, como nunca antes en la historia reciente del país, estar del lado de la paz representa réditos políticos nada desdeñables. Y esa ha sido quizá la gran estrategia pero

al mismo tiempo el enorme reto del presidente Santos: pretender alinear las preferencias individuales de una masa crítica de políticos regionales interesados en promover sus propias carreras, la mayoría de las veces a

“

Tanto las FARC como el gobierno son conscientes que cualquier esfuerzo por pensar en un eventual escenario de posconflicto requiere de la participación activa de las regiones en el proceso y de una apertura política que se iniciaría, en principio, desde la arena local.

”

través de prácticas poco estéticas, con el objetivo más loable de lograr la paz para el país. Ese tipo de sintonías hacen la diferencia en cualquier esfuerzo por garantizar una transición exitosa.

Los desafíos institucionales

Sin embargo, asegurar que esta renovada voluntad política en favor de la paz se concrete implica contar con un conjunto de herramientas que lo posibilite y, en este campo, aunque el Estado ha dado pasos importantes persisten enormes problemas en términos del rezago institucional de los departamentos y municipios que han sufrido con mayor fuerza los rigores de la guerra. El índice de capacidad institucional que construyeron el economista Jorge Iván González y su equipo para medir la situación de 121 municipios afectados por el conflicto teniendo como parámetro la condición de Bogotá, muestra que ninguno de éstos alcanza siquiera a tener un cuarto de la calidad institucional de la capital del país. Respecto a un valor óptimo de 100, Bogotá se alza con un índice de 97.6, mientras los demás municipios, excepto Medellín (41.7), apenas si alcanzan un 25. Inclusive, la mayoría de ellos (105 de 121 municipios) cuentan

con un índice que se sitúa por debajo de 15 (González, 2011: 182 y ss.).

Sin duda, una situación que resulta problemática si se tiene en cuenta que una eventual apertura del sistema político local en el que se espera participen nuevos agentes antes en la ilegalidad requiere de una infraestructura lo suficientemente robusta para tramitar demandas sociales de muy diverso tipo.

Así pues, hacer del posconflicto un escenario estable es un asunto no sólo de democracia sino de gobernabilidad en el nivel local, lo cual implica repensar las exigencias desmedidas en profundizar el proceso de descentralización y, más bien, imaginar un nuevo esquema que corrija los defectos congénitos de este diseño tal y como se ha implementado. Por esta razón, la discusión debe trascender los aspectos procedimentales que tradicionalmente se asocian a la democracia y prestar un mayor interés en la reestructuración institucional del Estado mismo. Concretamente, el país necesita con urgencia un nuevo modelo de intermediación política entre el Estado central y las regiones que posibilite una mayor coordinación entre los entes territoriales y facilite un monitoreo adecuado de los poderes delegados a cada uno de ellos, sobre todo cuando se trata de aprovechar el inmenso potencial de la arena local como escenario de construcción de paz. 

Referencias

- GONZÁLEZ, J. CARDOZO. M. RIVAS, G. RUÍZ, G. CASTRO, C. y GALVIS, D. (2011) Circuitos, centralidades y estándar de vida. Un ensayo de geografía económica. Bogotá: CID – ODECOFI.
- JARAMILLO, S. (2013) La Transición en Colombia ante el proceso de paz y la justicia. Conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia. Publicada en el diario El Tiempo, mayo 13 de 2013. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12796874.html

* Víctor Barrera

Investigador CINEP/Programa por la Paz.
Equipo Violencia, paz y construcción del Estado.